



Asamblea General

Distr. general
10 de julio de 1998
Español
Original: inglés

Quincuagésimo segundo período de sesiones

Temas 20, 107 y 112 del programa

**Fortalecimiento de la coordinación de la asistencia
humanitaria de las Naciones Unidas y de socorro
en casos de desastre, incluida la asistencia
económica especial**

**Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados, cuestiones relacionadas con los
refugiados, los repatriados y las personas desplazadas
y cuestiones humanitarias**

Cuestiones relativas a los derechos humanos

Carta de fecha 9 de julio de 1998 dirigida al Secretario General por el Representante Permanente de Etiopía ante las Naciones Unidas

Tengo el honor de adjuntar un comunicado de prensa de la Misión Permanente de Etiopía ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra (véase el anexo), que fue emitido el 2 de julio de 1998 en relación con la declaración formulada por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos el 1º de julio de 1998.

Le agradecería que tuviera a bien hacer distribuir el texto de la presente carta y de su anexo como documento oficial de la Asamblea General, en relación con los temas 20, 107 y 112 del programa de su quincuagésimo segundo período de sesiones.

(Firmado) Duri **Mohammed**
Embajador
Representante Permanente

Anexo

Comunicado de prensa emitido el 2 de julio de 1998 por la Misión Permanente de Etiopía ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos emitió una declaración muy extraña el 1º de julio de 1998 sobre los derechos humanos de los eritreos en Etiopía, declaración que ha causado una profunda decepción al Gobierno de la República Democrática Federal de Etiopía.

La declaración de la Alta Comisionada en que critica a Etiopía por violaciones de los derechos humanos de los nacionales de Eritrea no sólo es absolutamente infundada, sino que se trata también del tipo de declaración que contribuye a socavar la credibilidad de la Oficina del Alto Comisionado.

La Alta Comisionada no puede desconocer el hecho de que, a diferencia del tratamiento que da el Gobierno de Eritrea a los etíopes en ese país, las medidas adoptadas por el Gobierno de Etiopía en relación con los nacionales de Eritrea en Etiopía se han inscrito estrictamente en el marco de la ley, de plena conformidad con los principios del derecho internacional humanitario y con pleno conocimiento y respeto de las disposiciones de los tratados internacionales en la esfera de los derechos humanos.

¿Acaso no se da cuenta la Alta Comisionada de que ningún organismo de las Naciones Unidas con mandato en esas esferas, trátese del Comité Internacional de la Cruz Roja o de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, tiene acceso a Eritrea?

La Alta Comisionada no puede desconocer la declaración emitida por el Gobierno de Etiopía, que le fue transmitida por el Representante Permanente de Etiopía ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra en carta de fecha 25 de junio de 1998, en la que se da cuenta pormenorizadamente de las atrocidades cometidas por el régimen de Eritrea contra los nacionales etíopes en aquel país. Además, cuesta trabajo imaginar que la Alta Comisionada no tiene conocimiento de la difícil situación en que están más de 600 nacionales etíopes detenidos en Eritrea. De hecho, se ha comunicado a la Alta Comisionada que esos etíopes están siendo torturados y sometidos a un trato inhumano y degradante, así como la información relacionada con más de 4.000 etíopes que han sido expulsados de Eritrea con las manos vacías, tras haberseles confiscado sus propiedades.

¿Acaso la Alta Comisionada no tiene conocimiento de los ataques aéreos realizados por Eritrea contra centros civiles, calculados deliberadamente para matar y mutilar a niños y ancianos? ¿Por qué prefirió la Alta Comisionada guardar silencio en relación con estos hechos y eligió referirse al diálogo en la parte de su declaración en que se menciona el nombre de Eritrea?

Etiopía no cree en la represalia. Por consiguiente, lo que haga Eritrea no puede justificar y no justificará la adopción de medidas similares por parte de Etiopía. Etiopía tiene escrúpulos morales. La Alta Comisionada no puede atribuir esas cualidades a las autoridades de Eritrea. La confirmación de estas afirmaciones se puede encontrar fácilmente en muchas partes, incluso en el propio sistema de las Naciones Unidas.

La Alta Comisionada no puede afirmar que Etiopía no ha explicado las razones fundamentales por las que ha adoptado medidas respecto de algunos nacionales de Eritrea en Etiopía. Se trata de consideraciones de seguridad. A este respecto, no debe haber absolutamente ninguna duda por parte de la Alta Comisionada de que se ha obligado a

abandonar el país únicamente a los nacionales de Eritrea en Etiopía que han participado en la movilización de fondos para financiar la agresión de Eritrea y a los involucrados en actividades de espionaje y otras actividades clandestinas como agentes del Gobierno de Eritrea contra la seguridad nacional de Etiopía.

Esas medidas se han adoptado con pleno respeto de la seguridad y la dignidad de las personas y de plena conformidad con los principios del derecho internacional humanitario. Además, el Gobierno de Etiopía está siempre dispuesto a cooperar con los que deseen investigar cualesquiera denuncias de violaciones de los principios del derecho internacional humanitario en Etiopía y tengan el mandato necesario para ello. En contraposición, la Alta Comisionada debería saber que eso no puede hacerse en Eritrea y, en consecuencia, debería darse cuenta de la magnitud de los crímenes que Eritrea comete subrepticamente contra los etíopes que se encuentran en ese país y sin que haya posibilidades de observar la situación.

En vista de todos estos elementos, la declaración de la Alta Comisionada resulta inexplicable y daña la credibilidad de su oficina. Tanto más cuanto que no se ha dado aún respuesta a la petición formulada con carácter urgente por el Gobierno de Etiopía a la Alta Comisionada para que ejerza presión sobre el Gobierno de Eritrea a fin de que respete plenamente los derechos de los etíopes detenidos ilegalmente en Eritrea.

Como la declaración de la Alta Comisionada se basa en información extremadamente errónea, no debe sorprender que toda la cuestión de la agresión de Eritrea contra Etiopía y del desplazamiento de cientos de miles de personas y los sufrimientos resultantes no haya sido comprendida cabalmente por la Alta Comisionada.

La Misión Permanente de la República Democrática Federal de Etiopía ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra considera trágico que la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos haya permitido que esa oficina se use indebidamente y en una forma que con toda seguridad socavaría la credibilidad de la Alta Comisionada. Es preciso rectificar y el pueblo de Etiopía espera que se haga, especialmente los etíopes que han sido y siguen siendo torturados y sometidos a tratos inhumanos por las autoridades de Eritrea.